

C.A. de Temuco

Temuco, dos de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Que, don Pedro Ignacio Peña Sánchez, abogado por la parte demandante en autos sobre Procedimiento Ordinario de Aplicación General, caratulados “GARRIDO con MUNICIPALIDAD DE RENAICO”, causa RIT O-40-2023, ha deducido recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva de fecha 18 de diciembre de 2023, dictada por el Juzgado de Letras de Angol, a través de la cual se resolvió:

I.- Que, SE RECHAZAN las solicitudes incidentales promovidas por las partes en relación con la exhibición de instrumentos requerida respecto de la contraria, de manera que no se hace efectivo el apercibimiento contemplado en el artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo.

II.- Que, SE ACOGE, parcialmente, la demanda enderezada a folio 2, con fecha 30 de junio de 2023, por don PEDRO IGNACIO PEÑA SÁNCHEZ, abogado, en representación convencional de doña INGRID IVETH GARRIDO MORA, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO, representada legalmente por su alcalde don JUAN CARLOS REINAO MARILAO, sólo en cuanto se declara que se configuró en la especie una relación contractual de naturaleza laboral entre doña INGRID IVETH GARRIDO MORA y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO, la que se extendió entre los días 2 de enero de 2007 y 2 de mayo de 2023, en los términos de los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo.

III.- Que, SE RECHAZA, en todo lo demás, la demanda interpuesta a folio 2, con fecha 30 de junio de 2023, por don PEDRO IGNACIO PEÑA SÁNCHEZ, abogado, en representación convencional de doña INGRID IVETH GARRIDO MORA, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO, representada legalmente por su alcalde don JUAN CARLOS REINAO



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QDJPXPZKNSR

MARILAO, en particular, en lo referente a las acciones de despido indirecto justificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales y previsionales, y, en consecuencia, se entiende que la relación laboral y, por ende, el contrato de trabajo entre las partes, terminó por renuncia de la demandante, verificada con fecha 2 de mayo de 2023.

IV.- Que, cada parte asumirá las costas causadas en el proceso.

Que, el recurrente invoca, como causales de nulidad, la del artículo 477 del Código del Trabajo conjuntamente con la del artículo 478 letras c), del mismo cuerpo legal; y, en subsidio, aquella prevista en el artículo 478 letra c) del aludido Código del Trabajo.

Que la vista del recurso tuvo lugar el día veintidós de agosto en curso.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en el contexto del presente recurso, la recurrente, el 30 de junio de 2023, presentó demanda, en contra de la Ilustre Municipalidad de Renaico, solicitando el reconocimiento de relación laboral, nulidad del despido, despido indirecto y cobro de prestaciones laborales adeudadas. Alegó haber trabajado bajo subordinación desde el 01 de enero de 2007 hasta el 02 de mayo de 2023 con contratos a honorarios que deberían haber sido contratos laborales, y que no se le realizaron los pagos previsionales correspondientes. La demandada argumentó que la relación era de carácter civil, no laboral. El tribunal, en sentencia definitiva del 18 de diciembre de 2023, aceptó el reconocimiento de la relación laboral pero rechazó las demandas de despido indirecto justificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones adeudadas y cotizaciones previsionales.

SEGUNDO: Que, el recurrente impugna la sentencia en lo principal, por la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es: “Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior” y de manera conjunta por la causal del artículo 477 del



Código del Trabajo, es decir: “El haberse dictado el fallo con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo”.

En subsidio, opone también la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo.

TERCERO: Que, como primera causal invoca la del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo señalando que, en un juicio, los litigantes presentan hechos relevantes al tribunal, y éste debe emitir un pronunciamiento para calificar jurídicamente los mismos. En este caso, el juez analizó las pruebas presentadas y determinó que existió una relación laboral entre las partes, lo cual fue confirmado en lo resolutive de la sentencia.

Agrega que también se acreditó que su representada ejerció su derecho al despido indirecto conforme al artículo 171 del Código del Trabajo, basándose en el incumplimiento grave de obligaciones por parte de la Municipalidad demandada. Las razones invocadas fueron el no pago de cotizaciones previsionales, la falta de escrituración del contrato de trabajo y el no pago de feriados. Sin embargo, el juez calificó el auto despido como injustificado.

Sostiene que habiéndose reconocido la existencia de la relación laboral, entre las partes, se debió declarar, además, como justificado el despido indirecto y junto con ello, acogerse todas las pretensiones contenidas en la parte petitoria de la demanda, al cumplirse los requisitos del auto despido, motivo por el cual la calificación jurídica realizada por el tribunal del término de la relación laboral es errada y debe ser rectificada por medio del presente recurso de nulidad.

Refiere que tal yerro ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo toda vez que dicha decisión impide que su representada reciba las indemnizaciones legales que le corresponden, protegidas por principios como Pro Trabajador y Protección a las Cotizaciones. Esta decisión se basa en una errónea calificación jurídica de los hechos relacionados con la relación contractual discutida y si se



hubiere aplicado correctamente la norma, el resultado del caso habría sido diferente, reconociendo el despido indirecto como justificado.

Finalmente refiere que el sentenciador concluye que no se demostró la retención ni el pago de las cotizaciones previsionales por parte de la demandada, lo que impidió calificar el despido indirecto como justificado. Sin embargo, dado que se reconoce la relación laboral entre su representada y la Municipalidad de Renaico, y considerando la normativa aplicable, el no pago de cotizaciones debe ser calificado como un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte de la demandada y así, al existir un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, y de acuerdo al artículo 171 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 160 N°7 del mismo cuerpo legal, el despido indirecto debe calificarse como justificado y, por lo tanto, otorgar las prestaciones laborales que se adeudan, cuales son: indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicios y recargo legal del 50% sobre los años de servicios, además de ordenar a la demandada al pago de las cotizaciones de seguridad social por todo el periodo trabajado.

CUARTO: Que, conjuntamente con la causal anterior, el recurrente deduce la causal del artículo 477 del código del trabajo por estimar que la sentencia se ha dictado con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al haberse infringido el artículo 58 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 17 y 19 del decreto ley 3500 por contravención de ley.

Refiere que la sentencia reconoce la existencia de una relación laboral entre la demandante y la Ilustre Municipalidad de Renaico, así como la falta de pago de las cotizaciones de seguridad social correspondientes y en consecuencia la demandada adeuda a su representada todas las cotizaciones por el período trabajado, por lo que se debe declarar esta deuda y ordenar su pago.



En relación con la nulidad del despido sostiene que el tribunal incurrió en una infracción de ley al interpretar erróneamente los incisos 5°, 6° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, lo que llevó a un contenido ajeno a la norma. El único requisito para la nulidad del despido es el no pago de las cotizaciones previsionales por parte del empleador, quien está en mora con sus obligaciones. Negar la nulidad del despido implica una incorrecta comprensión de las relaciones laborales y desconoce el principio de primacía de la realidad. Si el tribunal hubiere interpretado correctamente la normativa, habría condenado a la Ilustre Municipalidad de Renaico al pago de las cotizaciones adeudadas y habría acogido la nulidad del despido, ordenando el pago de las remuneraciones y prestaciones devengadas desde el despido hasta su convalidación.

Finalmente señala que habiéndose demostrado que se han vulnerado las normas detalladas en el recurso, resultando en definitiva en una calificación errónea y una infracción de ley que afectó el fallo, lo que constituye un motivo absoluto de nulidad según el artículo 477 del Código del Trabajo, solicita se acoja el Recurso, anulando parcialmente la sentencia y dictando una nueva que confirme la existencia de la relación laboral, condenando a la demandada al pago completo de las cotizaciones de seguridad social por el período trabajado y a la nulidad del despido.

QUINTO: Que, las dos causales invocadas en el recurso requieren de un supuesto previo, por cuanto, para que pueda prosperar la errada calificación jurídica de los hechos o la infracción de ley con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, el recurrente debe respetar el sustrato fáctico que ha establecido el sentenciador.

SEXTO: Que, sobre el punto es pertinente consignar que se establecieron como hechos de la causa los siguientes:

1.-Que, desde el 02 de enero de 2007 y hasta el 02 de mayo de 2023, la actora Ingrid Iveth Garrido Mora prestó servicios para la



Municipalidad de Renaico, como “apoyo familiar” para el departamento social de la DIDECO.

Posteriormente, en paralelo, se desempeñó como “Monitora” para el programa “Vínculos”, del departamento social de la DIDECO, y finalmente se desempeñó en paralelo como “Ejecutiva de Atención Usuaris”, en la OMIL, dependiente de la DIDECO, sobre la base de una serie de contratos a honorarios, con vigencia anual, pactándose un honorario expresado en un monto anual cuyo pago se efectuaba en 12 cuotas mensuales, iguales y sucesivas. Los servicios se prestaron sujeta la demandante a una jornada ordinaria, controlada por la Municipalidad de Renaico y que contemplaba feriados, permisos administrativos, admitía presentación de licencias médicas, entre otras prerrogativas.

2.- Que, en el marco de la ejecución del contrato del año 2023, la demandante comunica, con fecha 02 de mayo de 2023, a la demandada que desde esa misma fecha pone fin a su contrato, a través del documento que denomina “AUTODESPIDO”, invocando la causal establecida en el artículo 171 del Código del Trabajo: N°7 del Artículo 160 esto es "incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato".

SÉPTIMO: Que, a partir de tales hechos, y con el mérito de la prueba rendida, el sentenciador da por establecida la existencia de una relación laboral entre las partes, la que tuvo vigencia entre el 02 de enero de 2007 y hasta el 02 de mayo de 2023, hecho que no se encuentra cuestionado por el recurrente.

Sobre el auto despido, el sentenciador examina los fundamentos del despido indirecto, centrándose en tres causales del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo: la falta de pago de cotizaciones previsionales, la ausencia de un contrato de trabajo escrito y el incumplimiento en el pago de feriado legal y proporcional. Luego, argumenta que la Municipalidad de Renaico actuó bajo una norma legal que le permitía contratar personal a honorarios, lo que le otorgaba una presunción de



legalidad que sólo se cuestiona con la sentencia que declara la verdadera naturaleza de la contratación. Esta presunción impide que se le impute incumplimiento grave, ya que los gastos relacionados con prestaciones sólo adquieren certeza tras la sentencia. Sobre este punto, explica que no puede haber erogación o gasto público sin habilitación legal previa, de forma tal que, durante toda la vigencia de la relación contractual con la actora, la parte demandada carecía de un título para la retención, declaración y pago, en las entidades de seguridad social, de las cotizaciones de dicha índole, que establece como obligación para los empleadores el artículo 58 del Código del Trabajo, por lo que el reproche o incumplimiento en que la actora funda su demanda no resulta imputable a la demandada, careciendo de gravedad para habilitar el término indirecto de contrato.

Además, se desestimó la acusación de no otorgar feriados, ya que con el mérito de la prueba documental consistente en “Certificado de Uso de Días Libre”, en relación con la demandante, se colige que ésta hizo uso de todos sus días de feriado legal.

Como corolario de aquello, rechaza la causal de auto despido y da valor a lo que dispone el artículo 171 del Código del Trabajo, esto es, que la relación laboral terminó por renuncia de la demandante con fecha 02 de mayo de 2023.

Sobre la nulidad del despido señala que no se discute que la demandada no retuvo ni pagó las cotizaciones previsionales de la actora, ya que actuó bajo la creencia de que se trataba de un contrato a honorarios. No obstante, el tribunal determinó que era un contrato de trabajo. Sin embargo, refiere que, según la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, la sanción de la nulidad del despido se desnaturaliza, por cuanto el Estado o las Municipalidades no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido, en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren de un pronunciamiento condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional



para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

OCTAVO: Que, como ya se señaló, el recurrente alega en forma conjunta las causales de los artículos 478 letra c) y 477, ambos del Código del Trabajo, alegando una errónea calificación de los hechos conjuntamente con una infracción de ley, en primer término respecto de los artículos 160 N° 7 en relación al artículo 58 del Código del Trabajo, 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, que establecen la obligación del trabajador de imponer y del empleador de pagar las cotizaciones de sus trabajadores, donde la única calificación jurídica que es correcta respecto del no pago de cotizaciones de parte de la demandada a la actora, es la de un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo.

NOVENO: Que, de esta manera, tal como lo hace presente el recurrente, en la sentencia impugnada no se ha dado aplicación a las normas que regulan la materia, efectuándose una errónea calificación jurídica.

En efecto, el artículo 58 del Código del Trabajo establece que “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”, en tanto el artículo 17 del DL 3.500 de 1980 prescribe, por su parte, que “Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y menores de 60 años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponible”, lo que debe relacionarse con lo preceptuado por el artículo 19 del aludido Decreto Ley en tanto dispone que “Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador, el trabajador independiente a que se refiere el inciso tercero del artículo 90, el afiliado voluntario a que se refiere el Título IX o la entidad pagadora



de subsidios, según corresponda, en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas, o aquel en que se autorizó la licencia médica por la entidad correspondiente, en su caso, término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo expirare en día sábado, domingo o festivo. El trabajador independiente a que se refiere el inciso primero del artículo 90 pagará las cotizaciones a que se refiere este Título, en la forma y oportunidad que establece el artículo 92 F.

Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo. Ambas cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente artículo”.

A partir de lo anterior, debe concluirse que la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, el cual es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde a él mismo sufragar, dentro del plazo que la ley fija, de forma tal que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos, de modo tal que habiéndose establecido en la sentencia en contra de la cual se recurre, la existencia de una relación laboral y no de un contrato de honorarios, correspondía dar aplicación a las normas legales antes referidas y al no haberlo hecho, se ha incurrido en la infracción de Ley que se reclama.

DÉCIMO: Que, sobre este punto cabe hacer presente que la Excma. Corte Suprema ha unificado jurisprudencia en fallo reciente, a saber, Rol N°199.263-2023 de fecha 17 de julio de 2024, caratulados “Becerra y otra con Ilustre Municipalidad de Lolol”m en que ha



señalado “...Que de esta manera, la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y se presume por todos conocida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos.

A lo anterior, cabe agregar que la sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador. En efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación laboral, se dedujo demanda de cobro de prestaciones con el objeto de que se condenara a la demandada, además de declarar el despido indirecto, al pago de las cotizaciones de seguridad social porque no habrían sido solucionadas...”

Agrega el fallo en comentario en su considerando Octavo “ Que entonces, conforme a lo razonado en los considerandos anteriores se yergue como conclusión, la procedencia de la acción de despido indirecto ante el no pago por parte del empleador de las cotizaciones de seguridad social, aun cuando la relación laboral haya sido declarada en la respectiva sentencia, pues el criterio de este tribunal ha sido el de asemejar el auto despido o despido indirecto en todo orden de materias al despido, como acto unilateral del empleador, habiendo establecido, por la vía de la unificación de jurisprudencia, que cuando se verifica una omisión en el cumplimiento del deber de pagar las cotizaciones previsionales, por parte del empleador, se configura un incumplimiento grave de sus obligaciones, que justifica el despido indirecto, dando lugar a las indemnizaciones legales consecuentes (Rol N°67.556-2022, N°45.879-2017 y N°33.256-2019). ”

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, sobre la base de la calificación jurídica desarrollada, habiéndose acreditado que la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QDJPXPZKNSR

municipalidad demandada no pagó las cotizaciones previsionales durante todo el lapso que se mantuvo vigente la relación laboral reconocida en el fallo impugnado, a juicio de esta Corte, por tratarse de una obligación legal, que tiene por objeto asegurar el sustento futuro y la salud de los trabajadores, se debe colegir que su incumplimiento reviste la gravedad suficiente que justifica el despido indirecto comunicado por la actora y así ha de declararse, debiendo disponerse asimismo, que la demandada solviente aquellas cotizaciones que no fueron pagadas por la actora.

Puntualmente en el considerando vigésimo quinto de la sentencia impugnada, se estableció como hecho que en FONASA no se registra ni declaración ni pago entre los meses de enero de 2007 a mayo de 2012; registra declaración y no pago de tales cotizaciones, por la Municipalidad de Renaico, RUT: 69.180.400-3, entre los meses de agosto y diciembre de 2013; y registra declaración y pago de dichas cotizaciones entre los meses de enero de 2017 y mayo de 2023, por la propia demandante conforme a la Ley N° 21.133, que modificó las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social.

No se incorporaron probanzas respecto del estado de las cotizaciones de AFP.

Finalmente respecto de cotizaciones en el Fondo de Cesantía a) no registra información referente a declaración y pago de cotizaciones del seguro de desempleo entre los meses de julio de 2009 y mayo de 2012; b) registra declaración y no pago de tales cotizaciones, por la Municipalidad de Renaico, RUT: 69.180.400-3, entre los meses de agosto y diciembre de 2013; y c) no registra información referente a declaración y pago de cotizaciones del seguro de desempleo entre los meses de enero de 2014 y septiembre de 2015, y entre los meses de marzo de 2016 y mayo de 2023.

DUODÉCIMO: Que, al efecto ha de tenerse presente lo sostenido por la Excma. Corte Suprema entre otras, en causa Rol



41.026-2021 en orden a que si bien nuestro ordenamiento considera que el entero de los aportes que deben pagar los trabajadores para los efectos previsionales, corresponde a una carga que le compete al empleador, mediante descuento que debe ejercer de sus remuneraciones, a fin de ponerlos a disposición del órgano previsional pertinente, dentro del plazo que fija la ley, se agrega por el Máximo Tribunal que “Sin embargo, cabe tener presente que el artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500, señala que las referidas cotizaciones deberán ser declaradas y pagadas por el empleador, el trabajador independiente o el afiliado voluntario, lo que permite concluir que el objetivo perseguido a través de la obligación consagrada en el artículo 58 del Código del Trabajo también puede ser alcanzado cuando es el propio trabajador quien paga directamente sus cotizaciones de seguridad social ante los organismos administradores, evitando la existencia de las denominadas “lagunas” en su cuenta de capitalización individual y habilitándolo para acceder a los beneficios que estas financian, por lo que sólo procedería que la sentencia ordene el pago de estas prestaciones cuando no hayan sido previamente enteradas, sea por el empleador o el trabajador.”.

Por lo anterior y si bien se acogerá el arbitrio de nulidad que se viene analizando, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo, ha de considerarse el hecho de haberse efectuado pagos de cotizaciones de seguridad social por parte de la actora.

DÉCIMO TERCERO: Que, de esta manera, ha de acogerse en esta parte el recurso de nulidad, para invalidar parcialmente la sentencia, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo en los términos en que se viene razonando, esto es, declarar justificado el despido indirecto y condenar a la demandada al pago de las indemnizaciones legales, y el pago de las cotizaciones de seguridad social que no hayan sido solventadas por la actora.



DÉCIMO CUARTO: Que, se alegó asimismo la infracción de ley de los incisos 5º, 6º y 7º del artículo 162 del código del trabajo, en cuanto no se dio lugar a la sanción de la nulidad del despido.

DÉCIMO QUINTO: Que, el sentenciador A Quo no ha incurrido en la infracción de Ley que se reclama, al no dar lugar a la sanción de nulidad del despido establecida en el artículo 162 del Código del Trabajo, toda vez que aquélla no resultaba ser procedente en la especie.

En efecto, no obstante la mora previsional establecida en la sentencia, se debe considerar que, si bien la sanción que contempla el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo es plenamente procedente cuando la sentencia del grado reconoce la existencia de la relación laboral, atendida su evidente naturaleza declarativa, tal efecto se debe distinguir cuando se demanda a un organismo público que contrató al demandante acudiendo a una norma estatutaria, pues, tratándose en su origen de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1º de la Ley N°18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de aquella institución, ya que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado -en la especie, conforme el artículo 4 º de la Ley N°18.883-que, en principio, concedió a la contratante una presunción de legalidad, por lo que no se encuentra en la hipótesis típica prevista en la ley para imponer esta sanción.

De esta manera, la aplicación de la nulidad del despido en un caso como el de marras, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, gravándose en forma desigual al ente público, puesto que se convierte en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que puede llegar a sustituir las del despido, de modo tal que no procede la sanción en comento cuando la relación laboral se



establece con un órgano de la Administración del Estado, lo que en caso alguno altera la obligación de enterar las cotizaciones previsionales adeudadas durante ese período.

Sobre lo anterior, tal como se razona en el fallo recurrido, la Excma. Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado reiteradamente, a partir de la sentencia dictada en la causa Rol N° 40.253-2017, sosteniéndose por el Máximo Tribunal, “que no corresponde aplicar la sanción de la nulidad del despido a los órganos de la administración, porque en estos casos se trata de contratos a honorarios que al menos en su origen, fueron acordados al amparo de un estatuto que les otorgaba una presunción de legalidad y la sanción pretendida se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado carecen de la capacidad de convalidar libremente el despido, por requerir un dictamen condenatorio previo, particularidad que los grave en forma desigual, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional y desproporcionada”. (Causa Rol 120.319-2022 de fecha 17 de noviembre de 2022 y en el mismo sentido sentencia de reemplazo dictada en causa Rol 231.229-2023 de fecha 21 de agosto de 2024).

De esta manera, y en cuanto a la sanción de nulidad del despido, la causal de nulidad que se viene analizando, no podrá prosperar, al no existir infracción de las normas legales invocadas, sin perjuicio de lo ya resuelto en el considerando 14°.

DÉCIMO SEXTO: Que no se emitirá pronunciamiento en relación a la causal subsidiaria presentada al acogerse la principal en la forma antes reseñada, y por versar sobre los mismos argumentos de la causal principal.

En mérito de lo expuesto, y visto además, lo dispuesto en los artículos 474, 477, 478, 480 y 482 del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que **SE ACOGE** parcialmente el recurso de nulidad deducido por el abogado Pedro Ignacio Peña Sánchez, en representación de la demandante, en contra de la sentencia dictada con fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés en causa RIT O-40-






2023 RUC 23- 4-0494886-5 del Juzgado de Letras del Trabajo de Angol, fundado en las causales conjuntas contempladas en los artículos 478 letra c) y 477 del Código del Trabajo por infracción de los artículos 160 N° 7 en relación a los artículos 58 del Código del Trabajo y 17 y 19 del Decreto Ley 3500, y, en consecuencia se anula parcialmente la sentencia antes singularizada y se reemplaza por la que se dicta a continuación.

II.- Que SE RECHAZA, en todo lo demás el referido recurso de nulidad.

Regístrese y devuélvase, por la vía pertinente.

Redacción a cargo de la Ministra Suplente Sra. Cecilia Subiabre Tapia.

Rol N° Laboral - Cobranza-22-2024.(jog)

<div></div> <div><div>Carlos Iván Gutiérrez Zavala Ministro Corte de Apelaciones Dos de septiembre de dos mil veinticuatro 12:16 UTC-4</div><div></div></div>	<div></div> <div><div>Cecilia Elena Subiabre Tapia Ministro(S) Corte de Apelaciones Dos de septiembre de dos mil veinticuatro 12:06 UTC-4</div><div></div></div>
--	---



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QDJPXPZKNSR

Pronunciada por la Segunda Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por el Ministro Sr. Carlos Gutiérrez Zavala y la Ministra (S) Sra. Cecilia Subiabre Tapia. Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.

En Temuco, a dos de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QDJPXPZKNSR

C.A. de Temuco

Temuco, dos de septiembre de dos mil veinticuatro.

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 478 del Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTO:

Se reproduce la sentencia recurrida de nulidad, con excepción de sus considerandos 26° al 32°, que se eliminan, al igual que el numeral III de su parte resolutive, manteniéndose los numerales I y IV y el numeral II, del cual se elimina la palabra “sólo”.

Y se tiene además presente:

Primero: Que, es un hecho probado que la demandante, doña Ingrid Iveth Garrido Mora, fue contratada a honorarios por la Municipalidad de Renaico y que la relación se prolongó desde el 02 de enero de 2007 al 2 de mayo de 2023, período en que permaneció sujeta a jornada de trabajo, horarios, control de asistencia y supervisión que ejercía la Dirección de Desarrollo Comunitario de la demandada, quien impartía en forma permanente instrucciones al equipo de trabajo al que se encontraba adscrita como apoyo familiar, luego como monitora y finalmente como ejecutiva de atención de usuarias, cumpliendo funciones que, por su generalidad y extensión temporal, por dieciséis años y cuatro meses, se transformaron en un servicio habitual del municipio, en las que se comprobaron determinados índices de laboralidad ajenos a una contratación a honorarios en los términos exigidos en el artículo 4 de la Ley N°18.883.

Segundo: Que, un servicio es ocasional cuando se trata de labores accidentales y no habituales, siendo tales las que, no obstante pertenecer a una municipalidad, son circunstanciales y diversas de las que realiza el personal de planta o a contrata; en tanto que son cometidos específicos, las actividades puntuales, es decir, que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente singularizadas, exigencias de accidentalidad y especificidad que no concurren en este caso, concluyéndose que en los hechos, esto es, en el devenir material,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PQFZXPLNSR

diario y concreto en que se desarrolló la referida vinculación, se configuró una de naturaleza laboral, al concurrir los requisitos a que se refieren los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo.

Tercero: Que, la figura del auto despido o despido indirecto contemplada en el artículo 171 del Código del ramo, está concebida para el caso que sea el empleador el que incurre en una causal de término del contrato por los motivos indicados en la ley, de manera que se radica en la persona del trabajador el derecho a cesar su continuación y a solicitar a la judicatura que ordene el pago de las indemnizaciones correspondientes con los incrementos legales; si el tribunal rechazare el reclamo deducido, se entenderá que tal vinculación terminó por renuncia del dependiente.

Tal institución pone de relieve la naturaleza bilateral de la relación contractual, que obliga al empleador a cumplir las obligaciones que surgen para él de su vinculación con el trabajador, dotando a este último de un mecanismo de salida en caso de incumplimiento mediante su notificación al infractor, alegación sujeta a la comprobación de los hechos fundantes que harán procedentes las prestaciones reclamadas. Lo relevante del despido indirecto es que responsabiliza al empleador de la pérdida de la fuente laboral del trabajador, resguardando el principio de estabilidad en el empleo, en virtud del cual el legislador regula las causales de terminación del contrato y establece los mecanismos de compensación para el caso que aquél no las respete. No se trata, por tanto, de una renuncia “que constituye un acto voluntario, libre y espontáneo” sino de una situación provocada por el empleador, causa de la desvinculación del dependiente, a quien se reconoce el derecho a obtener las reparaciones propias del despido injustificado.

Cuarto: Que, el Código del Trabajo contiene una serie de normas destinadas a proteger las remuneraciones. Así, su artículo 58, impone, entre otras, la siguiente obligación: “El empleador deberá



deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social”.

Tal descuento para los efectos de la seguridad social es perentorio según lo estipula el artículo 17 del Decreto Ley N°3.500, al prescribir que Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles.

El artículo 19 del referido texto estipula que las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador... en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas, agregando su inciso segundo que, “Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo”.

Como se puede advertir, la cotización previsional es un gravamen que afecta las remuneraciones de los trabajadores que es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional respectivo, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde a él mismo sufragar, dentro del plazo que la ley fija.

Quinto: Que, entonces, conforme a lo razonado, se alza como conclusión necesaria la procedencia de la acción por despido indirecto ante el no pago por parte de la empleadora de la cotizaciones de seguridad social, que dadas las consecuencias que acarrea al dependiente, sólo puede ser calificada como causal de gravedad, lo que permite configurar la de terminación del contrato prevista en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, que conforme a su artículo 171, puede ser esgrimida en contra de aquella, cuya



consecuencia es el pago de las indemnizaciones y recargos legales consecuentes.

Sexto: Que, por consiguiente, y entrando al mérito de la demanda y sobre la base de la calificación jurídica desarrollada anteriormente, habiéndose acreditado que a la fecha de la desvinculación el municipio no enteró las cotizaciones de seguridad social de la actora, se configura la omisión descrita en las citadas disposiciones, constitutiva de un incumplimiento grave que justifica el despido indirecto planteado.

Séptimo: Que, en consecuencia, habiéndose acogido la demanda declarativa de relación laboral por todo el período señalado, se declarará también, que su término se produjo por despido indirecto justificado, por lo que la demandante tiene derecho a percibir las indemnizaciones y recargos legales que se indicarán en lo resolutivo, siendo la base de cálculo la suma de \$1.132.000.- conforme consta en cláusula quinta de contrato suscrito por las partes de fecha 23 de enero de 2023.

Octavo: Que, en cuanto al cobro de cotizaciones de seguridad social, no obstante lo señalado en los considerandos precedentes, tal como se ha sostenido por la Excm. Corte Suprema en sentencia dictada en causa Rol 41.026-2021, lo que esta Corte comparte y hace suyo, si bien nuestro ordenamiento considera que el entero de los aportes que deben pagar los trabajadores para los efectos previsionales, corresponde a una carga que le compete al empleador, mediante descuento que debe ejercer de sus remuneraciones, a fin de ponerlos a disposición del órgano previsional pertinente, dentro del plazo que fija la ley, “cabe tener presente que el artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500, señala que las referidas cotizaciones deberán ser declaradas y pagadas por el empleador, el trabajador independiente o el afiliado voluntario, lo que permite concluir que el objetivo perseguido a través de la obligación consagrada en el artículo 58 del Código del Trabajo también puede ser alcanzado cuando es el propio trabajador quien



paga directamente sus cotizaciones de seguridad social ante los organismos administradores, evitando la existencia de las denominadas “lagunas” en su cuenta de capitalización individual y habilitándolo para acceder a los beneficios que estas financian, por lo que sólo procedería que la sentencia ordene el pago de estas prestaciones cuando no hayan sido previamente enteradas, sea por el empleador o el trabajador.”.

Noveno: Que, atento lo anterior y el mérito del considerando 25° de la sentencia que por este acto se reproduce, en que se establece que las cotizaciones de seguridad social fueron parcialmente pagadas por la actora, específicamente cotizaciones de salud, tales montos deberán ser descontados de la diferencia que resulte de aplicar el porcentaje legal de cotización obligatoria al monto de las remuneraciones que mes a mes percibió la actora durante todo su período laboral, lo que se determinará por los organismos correspondientes, y lo mismo cabe sostener respecto de las cotizaciones previsionales que hubiesen sido pagadas por la actora.

La demandada también deberá pagar el aporte del empleador al fondo de cesantía, desde que tal cotización es obligatoria en el contexto de una relación laboral y conforme a los hechos asentados en el considerando 25° de la sentencia que por este acto se reproduce, se estableció que tal prestación no se encuentra pagada.

Sobre este punto, cabe hacer presente lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en sentencia Rol N°231.229-2023, que señala que “Sin embargo, como a propósito de la aplicación a este tipo de casos de la institución consagrada en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo, se ha reconocido que los órganos de la Administración del Estado no podían, de acuerdo a la normativa y las reglas presupuestarias que los rigen, pagar libremente las cotizaciones de sus prestadores de servicios a honorarios durante la vigencia del vínculo, requiriendo para convalidar el despido, una vez calificada tal relación como laboral, de un pronunciamiento judicial condenatorio, estando, en definitiva, de buena fe y amparados por la mencionada presunción



de legalidad, debe concluirse que no puede tenérseles como deudor en mora o incumplidor para estos efectos, pues resultaría contradictorio no sancionarlos con la nulidad del despido, para luego imponerles multas e intereses penales.

Lo anterior, conduce a que las cotizaciones a que resulte condenado este tipo de empleador, amparado por la referida presunción, deberán ser incrementadas con reajustes, calculados desde la oportunidad que indican el inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N°17.322, y con intereses, los que sólo se devengarán desde la época en que el fallo que declaró el carácter laboral del vínculo quede ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N°3.500 y en la Ley N°17.322, pues considerando lo dicho se descarta la aplicación de intereses penales, de manera que deberán ser determinados en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo.

Además, a fin de mantener la debida concordancia con los razonamientos antes expuestos acerca del origen del contrato celebrado entre las partes, el cobro de dichas cotizaciones deberá excluir las multas a que aluden los artículos 19 inciso séptimo del Decreto Ley N°3.500 y 22 letra a) de la Ley N°17.322.

Décimo: Que, por último, en materia de cotizaciones de seguro de cesantía debe efectuarse una prevención adicional, dado que su financiamiento, a diferencia de lo que ocurre en cuanto a previsión y salud, es tripartito, constituido por aportes del trabajador, del empleador y del Estado. Tratándose de dependientes con contrato de trabajo indefinido, como ocurre en el caso, la contribución al seguro, según lo prevé el artículo 5 de la Ley N°19.728, se divide en un 0,6% de las remuneraciones imponibles de cargo del trabajador, un 2,4% de cargo del empleador y un aporte del Estado que corresponde a un monto global que se entera anualmente.



Entonces, sobre la base de lo dicho, en el caso del trabajador que no registra pago de estas cotizaciones durante la vigencia del contrato, sea efectuado por él o su empleador, se declarará que éste debe solucionarlas, incluyendo tanto el porcentaje que es de su cargo como aquel que debió descontar oportunamente de la remuneración del dependiente, dado que la legislación obliga que ambas fracciones de la cotización sean solucionadas durante la vigencia de la relación laboral, lo que en la especie no fue cumplido.

Por otra parte, de ordenarse el cumplimiento parcial de la obligación, limitado únicamente al porcentaje financiado por el empleador, se estarían perjudicando las futuras prestaciones a las que el trabajador pueda acceder con cargo a estos pagos, fundamentos que conducen a modificar lo que, en el último tiempo, se había decidido a este respecto.

Undécimo: Que, en cuanto a la procedencia de la nulidad del despido fundada en la mora previsional, se debe tener en consideración que si bien la sanción que contempla el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo es plenamente procedente cuando es la sentencia del grado la que reconoce la existencia de la relación laboral, atendida su evidente naturaleza declarativa, ello no es así en el caso específico en que el demandado corresponda a un estamento público que se vinculó con el empleado acudiendo a una norma estatutaria, puesto que, tratándose en su origen de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado (entendida en los términos del artículo 1 de la Ley N°18.575), concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado (en la especie, conforme el artículo 4 de la Ley N°18.883), que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.



En efecto, la aplicación de esta sanción en dichas situaciones se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que puede llegar a sustituir aquellas propias de la desvinculación, por lo que no procede cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y se constata la existencia de una deuda previsional.

Duodécimo: Que, por último, con relación a los feriados legal y proporcional demandados, considerando que resultó acreditado que la actora hizo uso de los mismos, la empleadora será eximida de su pago.

Décimo Tercero: Que, de esta manera, se dará lugar a la demanda, salvo en lo relativo a la sanción de la nulidad del despido y la solución de los feriados reclamados, condenando a la demandada al pago de las prestaciones que serán precisadas a continuación.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 477 y 482 del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que, se acoge parcialmente la demanda presentada en favor de doña Ingrid Iveth Garrido Mora en contra de la Municipalidad de Renaico, declarándose que la relación que vinculó a las partes desde el 02 de enero de 2007 al 02 de mayo de 2023 fue de naturaleza laboral, y que el despido indirecto fue justificado.

II.- Por lo anterior, la demandada deberá pagar a la demandante las siguientes indemnizaciones:

- 1.- Sustitutiva del aviso previo: \$1.132.000.-
- 2.- Indemnización de servicios correspondiente al máximo legal: \$12.452.000.-
- 3.- Recargo legal del 50%: \$6.226.000.-



Las sumas señaladas precedentemente deberán pagarse con los reajustes e intereses respectivos desde que quede ejecutoriada la presente resolución según lo disponen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

4.- Cotizaciones de seguridad social y de cesantía, que se encuentren impagas durante todo el período trabajado, esta última de acuerdo al porcentaje señalado, que devengarán los reajustes que ordenan los artículos 19 del Decreto Ley N°3.500 y 22 de la Ley N°17.322, calculados desde la época y en la forma que indican, e intereses determinados conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo, y únicamente desde la época en que esta sentencia quede ejecutoriada, sin considerar la aplicación de multas.

III.- Se rechaza en lo demás la demanda.





IV.- Cada parte soportará sus costas.

V.- Una vez firme y ejecutoriada la presente sentencia, remítanse los antecedentes a cobranza y a la respectiva institución previsional según lo dispone el artículo 461 del Código del Trabajo.

Regístrese y devuélvase, por la vía pertinente.

Redacción a cargo de la Ministra Suplente Sra. Cecilia Subiabre Tapia.

Rol N° Laboral - Cobranza-22-2024.(jog)

<div></div> <div>Carlos Iván Gutiérrez Zavala Ministro Corte de Apelaciones Dos de septiembre de dos mil veinticuatro 12:16 UTC-4</div> <div></div>	<div></div> <div>Cecilia Elena Subiabre Tapia Ministro(S) Corte de Apelaciones Dos de septiembre de dos mil veinticuatro 12:06 UTC-4</div> <div></div>
--	---

Pronunciada por la Segunda Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por el Ministro Sr. Carlos Gutiérrez Zavala y la Ministra (S) Sra. Cecilia Subiabre Tapia. Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.

En Temuco, a dos de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PQFZXPXLNSR